

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD

Bogotá, D.C., junio primero (01) de dos mil veintiuno (2021)

REF. ACCIÓN DE TUTELA No.2021-0294 promovida por el señor RAFAEL GABRIEL SOSA URIARTE en contra de COMISARIA DE FAMILIA 11 SUBA 1 y SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

1º.- Petición.-

El señor RAFAEL GABRIEL SOSA URIARTE ejercita la acción en nombre propio en contra de la COMISARIA DE FAMILIA 11 SUBA 1 y la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, con el fin de que se le tutelen sus derechos fundamentales de protección a la familia, de un menor de edad a no ser separado de su familia y al libre desarrollo de la personalidad.

En consecuencia, solicita se le ordene a la comisaria accionada tramitar el oficio que reporta violencia intrafamiliar al interior de los incidentes de desacato presentados; aplicar la ley de violencia intrafamiliar e imponer la medida de protección provisional dentro de las 4 horas siguientes; citar a audiencia por los desacatos a la medida de protección; y salvaguardar el derecho de su hija DIANA GABRIELA SOSA BONILLA a no ser separada de su familia.

2º.- Hechos.-

Refiere el accionante, en síntesis que se permite efectuar el Despacho, que contrajo matrimonio con la señora VIVIANA BONILLA MENESES en el año 2006.

Que la residencia de la familia se estableció en Puebla – México.

Que procrearon una hija de nombre DIANA GABRIELA SOSA BONILLA.

Que en el año 2010, la señora VIVIANA BONILLA MENESES sustrajo de territorio mexicano a su hija DIANA GABRIELA en forma ilegal.

Que la relación de pareja terminó y para poder garantizarle a su hija el derecho a relacionarse con su padre, se radico en la ciudad de Bogotá y llegaron a un acuerdo conciliatorio sobre la Custodia, Cuidado Personal, Alimentos y Visitas.

Que el día 16 de marzo del 2020 se la comisaría accionada emitió un auto por el delito de violencia intrafamiliar en contra de su hija, en donde se les conminó a: *"...cesar de inmediato y sin ninguna condición todo acto que atente contra los derechos fundamentales de tener una familia y nos ser separado de ella, a no involucrarla en las diferencias suscitadas entre los padres, no hacer comentarios que desmejore la imagen de padre o madre, no involucrar a terceras personas, a respetar sus opiniones al as salidas con el padre sin usar presiones, pero tampoco poner obstáculos para el cumplimiento de las visitas..."*

Que el 30 de abril del 2020 la comisaria accionada en respuesta a un correo electrónico por él enviado le respondió: *"...En cumplimiento del régimen de*

custodia y visitas durante el aislamiento preventivo obligatorio declarado por el Gobierno Nacional, la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se permite informar que: - Los derechos de custodia y visitas son de carácter constitucional y se derivan de la patria potestad. Tienen como fin garantizarle al niño, niña o adolescente su derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, por lo que no pueden incumplirse en situaciones de emergencia..."

Que por hechos acaecidos el 17 de julio de 2020 instauró ante la Comisaría accionada, un primer incidente de desacato reportando la obstrucción de la relación paterno-filial por parte de la señora VIVIANA BONILLA MENESES.

Que la señora VIVIANA BONILLA MENESES persiste en obstruir la relación paterno-filial en desmedro del derecho de visitas de su menor hija, y vulnerando lo establecido en la Medida de Protección-24-2020.

Que procedió a reportar ante la comisaria accionada un segundo incidente de desacato, por hechos que se presentaron el día 30 de julio de 2020.

Que el día 07 de agosto reportó a la comisaría accionada otros hechos, instaurando un incidente adicional.

Que el acoso y el desprecio de parte de la señora VIVIANA BONILLA MENESES por el libre desarrollo de la personalidad de su hija, lo siguió ejerciendo obstaculizando el 14 de agosto de 2020 de nuevo la relación paterno-filial, el derecho de visitas de la menor, razón por la cual originó una nueva solicitud a la comisaria, por trasgresión a la paz familiar en su familia separada.

Que se han presentado varios hechos que constituyen transgresiones a la paz familiar.

Que han sido 4 incidentes de desacato de obstrucción al relacionamiento paterno-filial a progenitor no-custodio durante varios fines de semana.

Que el día 15 de marzo del presente año, la comisaría accionada a pesar de la evidencia recopilada y el acervo probatorio aportado, en forma inverosímil determinó que no se comprobaron los hechos.

Que la comisaría accionada, desestima todo lo aportado y legaliza el proceder contrario a la Constitución, a las Leyes, a la Ley 294 de 1.996, constituyéndose en un precedente contrario a lo que la misma Comisaría había previamente resuelto en la Medida de Protección 24-2020.

3º.- Tramite.-

Corresponde por reparto conocer de la presente acción de tutela a este Juzgado y mediante proveído de fecha mayo tres (03) del año en curso se admite a trámite la misma.

Notificación efectuada a los entes accionados mediante correos electrónicos enviados el día lunes 3 de los cursantes.

La COMISARIA DE FAMILIA 11 SUBA 1 informa que allí se emitieron medidas de protección definitivas las cuales son de orden jurisdiccional, en aras de proteger los derechos de la menor DIANA GABRIELA SOSA BONILLA.

Comenta que el accionante confunde la acción jurisdiccional con la acción penal y el delito de violencia intrafamiliar, lo cual no es un asunto de competencia de ese Despacho.

Informa que la medida adoptada en el primer incidente de incumplimiento a la medida de protección, obedece al análisis conjunto de los elementos probatorios allegados al plenario, los cuales valorados en su integridad no dieron el convencimiento de la existencia de nuevos hechos de maltrato o de violencia psicológica por parte de la señora VIVIANA BONILLA MENESES en contra de la niña DIANA GABRIELA SOSA BONILLA.

Pone de presente que el accionante presentó 4 escritos separados con el fin de poner en conocimiento presuntos nuevos hechos de incumplimiento a la medida de protección, pero para la fecha de la primera audiencia 2 de octubre de 2020, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad, es totalmente válido el trámite unificado allí adelantado.

Narra que allí se conoció y adelantó con observancia del debido proceso, el trámite pertinente.

Relata que esa comisaría ha dado estricto cumplimiento a su deber legal, con observancia de todas las garantías legales y constitucionales, garantizando los derechos prevalentes de la niña DIANA GABRIELA SOSA BONILLA, mediante el fallo en el que otorgan medidas de protección definitivas en su favor, fallo que en nada vulnera los derechos de la niña a tener una familia, a no ser separada de ella y al libre desarrollo de su personalidad, conforme lo depreca el actor.

Hace saber que los asuntos relacionados con el cumplimiento de deberes parentales son de la competencia funcional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que a través del Defensor de Familia valorará la viabilidad o no de adelantar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos.

Refiere que no se encontró plenamente acreditado el incumplimiento a la medida de protección No.024-2020, que conllevaría a imponer una sanción consistente en una multa en contra de la señora VIVIANA BONILLA MESESES.

Manifiesta que las partes se deben ceñir al cumplimiento del acuerdo suscrito ante el Juez Octavo de Familia de esta ciudad y frente a cualquier incumplimiento adelantar el trámite correspondiente ante dicha instancia judicial.

Solicita denegar por improcedente la presente acción de tutela.

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL no contesto la acción de tutela dentro del término otorgado, razón por la cual se dará aplicación a la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

Una vez emitido el respectivo fallo el cual fue impugnado, correspondió por reparto conocer al Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogotá, donde declararon la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio a efectos de notificar a VIVIANA GABRIELA SOSA BONILLA, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE BOGOTÁ y PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

Motivo por el cual mediante providencia datada 26 de mayo del año en curso, se vinculó oficiosamente a VIVIANA GABRIELA SOSA BONILLA, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE BOGOTÁ y PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, a fin de que pudiesen ejercer su derecho de defensa manifestándose sobre los hechos que fungen de base a la misma.

Notificación efectuada a los citados entes mediante correos electrónicos enviados el día jueves 27 del mes y año en curso.

La DEFENSORA DE FAMILIA CENTRO ZONAL SUBA indica que ese ente ha atendido sendas diligencias administrativas, las cuales superan 10 solicitudes de restablecimiento de derechos en favor de la niña DIANA GABRIELA SOSA BONILLA, realizando oportunamente la verificación de derechos y adelantando los procesos administrativos pertinentes.

Informa que la fecha no se observa proceso administrativo de restablecimiento de derechos activo, ya que cursan tramites ante la Comisaria de Familia Suba 11 Suba 1.

El JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE BOGOTÁ manifiesta que allí se adelanta proceso de CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL de RAFAEL GABRIEL SOSA URIARTE contra VIVIANA BONILLA MENESES, al interior del cual se celebró audiencia el 2 de septiembre de 2020 donde las partes conciliaron, fijando la custodia de la menor en cabeza de ambos padres, es decir, custodia compartida y se estableció el régimen de visitas para ambos padres.

Que posterior a ello, por parte del padre ha radicado documentos relacionados a trámites en la Comisaria 11 de Familia, que se han agregado a las diligencias.

La PROCURADURIA DELEGADA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA – PROCURADORA 152 JUDICIAL II DE FAMILIA, hace saber que ante la Comisaria de Familia 11 Suba 1 de esta ciudad se solicitó medida de protección a favor de la menor DIANA GABRIELA SOSA BONILLA y en contra de sus padres, conminándolos a cesar de inmediato todo acto que atente contra los derechos fundamentales de tener una familia y no ser separada de ella, a no involucrarla en las diferencias suscitadas entre los padres.

Que ante el incumplimiento de la medida por parte de la señora VIVIANA BONILLA MENESES en el régimen de visitas, se presentó ante la comisaría 4 solicitudes de incidentes de incumplimiento o desacato, los cuales fueron cerrados el 15 de marzo de 2021, lo que concluye que esta acción de amparo es improcedente.

Que analizada la actuación procesal, se surtió el procedimiento señalado para esta clase de asuntos, sin que exista reparo alguno y sin que se encuentre vicio que reste validez a la actuación.

Que esta acción no puede verse como una nueva instancia, conforme lo pretende el peticionario.

Que dado que el accionante solicitó el acompañamiento dentro del proceso de custodia que se adelanta ante el Juzgado 8 de Familia de esta ciudad, como procuradora asignada requirió al juzgado para continuar con el trámite, donde el 17 de noviembre de 2020 se llegó a un acuerdo que puso fin al proceso.

Que las decisiones adoptadas por el juez de conocimiento se encuentran ajustadas a derecho y cada etapa procesal se desarrollo conforme a lo preceptuado en la Constitución y la Ley, es decir, acorde al ordenamiento jurídico, sin vulneración al derecho de defensa de las partes.

Que en cuanto a la intervención ante la Comisaria de Familia, no tiene la facultad legal para desplazar al personero, quien es el agente del Ministerio Público facultado para actuar en este caso.

Que por cuanto lo pretendido por el accionante es una determinación ajena a la actuación y decisión de la Procuraduría General de la Nación, no existe relación de la entidad con la petición del accionante, razón por la cual solicita desvincular a esa entidad.

VIVIANA GABRIELA SOSA BONILLA, no contesto la acción de tutela dentro del término otorgado, razón por la cual se dará aplicación a la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

CONSIDERACIONES

Se relieves en primer término que la ACCION DE TUTELA tiene como finalidad obtener la protección inmediata de los DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES como claramente lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Nacional. Los derechos que esgrimen los peticionarios como conculcados indiscutiblemente tienen tal rango y por ende son susceptibles de amparo por esta vía, siempre y cuando se den los demás requisitos previstos por el Constituyente de 1991 y por la Ley para el evento.

Planteado lo anterior, ha de circunscribiere este análisis en esta oportunidad al aspecto relativo a la procedibilidad de la presente ACCIÓN DE TUTELA en punto a la petición que versa sobre la presunta violación de tales derechos, pues solo de ser afirmativa la respuesta que se tenga al cuestionamiento que en tal sentido debe hacerse por parte de este Despacho, podrá entrarse a la trasgresión que alude la parte accionante.

Establece el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, al consagrar la ACCIÓN DE TUTELA, que ésta "... Solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". Norma que fue desarrollada por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1.991, que a la letra reza: "*Causales de improcedencia de la Tutela...:*

Quando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.- La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficiencia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.-"

DEBIDO PROCESO

Al respecto del debido proceso la Sentencia No. T-576/92 dice:

"El Derecho Fundamental al Debido Proceso Administrativo es un conjunto complejo de circunstancias de la administración que le impone la ley para su ordenado funcionamiento, para la seguridad jurídica de los administrados y para la validez de sus propias actuaciones. Dentro de aquellas circunstancias, se encuentran los medios, que el conocimiento jurídico denomina

"RECURSOS", a disposición de los administrados para defenderse de los posibles desaciertos de la administración, bien sea irregularidad formal, injusticia o inconveniencia, hipótesis todas previstas en la ley, y que provocan con su uso la denominada "vía gubernativa", a fin de permitir a la Administración la corrección de sus propios actos mediante su modificación, aclaración o revocatoria, y, a los administrados la garantía de sus derechos por aquella, sin tener que acudir a la instancia judicial".

"La acción de tutela no procede cuando existan otros medios judiciales para hacer valer el derecho, sin perjuicio de que pueda ser utilizada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, oportunidad que no se da en el presente asunto por no ser el perjuicio de naturaleza irremediable. Sin embargo, el amparo que se hace del derecho al debido proceso asegura el amparo al también derecho fundamental al libre acceso a la justicia, que podría verse desconocido con la decisión administrativa, toda vez que la ley no libera expresamente a la administración de agotar la vía gubernativa".

Así mismo y en relación con el debido proceso la Sentencia T-616/06 dice:

"A la luz de las regulaciones de la Carta Fundamental (artículos 29 y 209), el debido proceso administrativo impone la publicidad como principio rector de las actuaciones administrativas (artículo 209 C.P. y 3º C.C.A.), de tal manera que la Administración resulta obligada a poner en conocimiento de sus destinatarios, todos aquellos actos que supongan una afectación directa de su situación jurídica. En estos términos, la Carta Política exige que, cuando se trata de definir o derivar la responsabilidad de las personas que pueden ser sujetos de una sanción, la actuación correspondiente se surta respetando el principio de la publicidad. Es decir, las autoridades administrativas resultan obligadas a dar a conocer sus actuaciones mediante las "comunicaciones o notificaciones", que para el efecto plasme el ordenamiento jurídico (artículo 3º C.C.A)".

Por otro lado, la sentencia T-647/03 señala la improcedencia de la tutela, cuando no existe una amenaza cierta y contundente:

"De ésta manera, si no existe una razón objetivada, fundada y claramente establecida por la que se pueda inferir que los hechos u omisiones amenazan los derechos fundamentales del tutelante, no podrá concederse el amparo solicitado. La amenaza debe ser entonces, contundente, cierta, ostensible, inminente y clara, para que la protección judicial de manera preventiva evite la realización del daño futuro. De tal forma que la acción de tutela sólo será procedente cuando se origine en hechos ciertos y reconocidos, que permitan amparar la violación actual de un derecho indiscutible".

Empero, la Sentencia T-010/08 reitera el concepto sobre la procedencia de la acción de tutela:

"Cierto es que en varias oportunidades la Corte Constitucional ha concedido la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar perjuicio irremediable, pero en todos estos casos se ha

tratado de personas que por una u otra razón se ven colocadas en situación de vulnerabilidad evidente. En relación con lo anterior, es preciso recordar que la Corte Constitucional ha sido insistente en afirmar que para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio es necesario demostrar que, en efecto, se trata de evitar un perjuicio irremediable. En esa línea de argumentación, ha dicho la Corte que se considera irremediable el perjuicio cuando "la lesión y amenaza de los derechos fundamentales invocados sea real, 'no se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la posibilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada. La amenaza requiere de un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o moral'"

En el mismo sentido la Sentencia T-532/08 ha dicho:

"Desde muy temprana jurisprudencia la Corte Constitucional ha intentado precisar cuales son los requisitos que ha de reunir el otro medio de defensa judicial para que se le considere eficaz para la protección de los derechos fundamentales. Así, en la sentencia T-003 de 1992 sostuvo esta Corporación que el enunciado normativo del inciso tercero del artículo 86 constitucional debía interpretarse en el sentido que el otro medio de defensa judicial "(...) tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho". Por otra parte, en la sentencia T-006 de 1992, se aseveró que correspondía al juez de tutela indagar si la "acción legal alternativa, de existir, es capaz de garantizar la protección inmediata de los derechos vulnerados o amenazados". En esa oportunidad la Corte acudió al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos para precisar las características que debía reunir el otro medio de defensa judicial para desplazar a la acción de tutela, y concluyó que éste debía ser sencillo, rápido y efectivo, de conformidad a lo previsto en dicho instrumento internacional.

Criterios que han sido reiterados en numerosos fallos posteriores. En definitiva, de la interpretación sistemática del artículo 86 de las Carta y del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, ha entendido esta Corporación, que han de existir instrumentos realmente idóneos para la protección de los derechos; cuando ello ocurre la persona debe acudir a la vía judicial ordinaria y no a la tutela, pues el carácter subsidiario de esta acción así lo exige. Contrario sensu, es posible que en virtud de circunstancias especiales el otro medio de defensa no se proyecte con la suficiente aptitud para salvaguardar los derechos de su titular, caso en el cual la tutela se erige como el instrumento válido de acción judicial"

Igualmente la Sentencia T-192/09 se refiere a la relevancia constitucional del requisito general de subsidiariedad de la acción de tutela y al respecto dice:

"El requisito de subsidiariedad de la acción de tutela responde al carácter expansivo de la protección de los derechos

fundamentales respecto de las instituciones que conforman el aparato estatal y, de manera particular, las instancias que ejercen la función pública de administración de justicia. En efecto, la exigencia de este requisito, lejos de disminuir el ámbito de exigibilidad judicial de dichos derechos, presupone que los procedimientos judiciales ordinarios son los escenarios que, por excelencia, están diseñados para garantizar su efectividad, a través de órdenes con contenido coactivo. A su vez, la subsidiariedad es corolario del principio de supremacía constitucional, el cual no sólo es aplicable al ámbito de la producción legislativa, sino que informa la actividad estatal como un todo. En ese sentido, la exigibilidad de los derechos fundamentales no es un asunto radicado en la competencia de los jueces de tutela, sino que es un presupuesto para la legitimidad, desde la perspectiva constitucional, de la actuación de las autoridades públicas y de los particulares. Esto lleva a inferir que dentro del parámetro normativo para la decisión judicial, cualquiera que sea la instancia encargada de adoptarla, los postulados constitucionales determinan la validez de la aplicación de la normatividad de rango inferior. Por ende, el principio según el cual la Carta Política es "norma de normas" conlleva como consecuencia necesaria la constitucionalización de cada una de las jurisdicciones. Así, cada una de ellas tendrá como objetivo principal la preservación de la integridad del ordenamiento jurídico en su conjunto y, de manera especial, la vigencia de los postulados constitucionales".

Por otra parte, la Sentencia T-143/00 dice cuando nos encontramos ante un perjuicio irremediable y al respecto señala:

"La materialización de un perjuicio irremediable como elemento esencial para la procedencia excepcional de la acción, cuando existan vías judiciales distintas para la protección de los derechos, no se vislumbra en este caso, porque no se dan los elementos constitutivos de éste, es decir, la inminencia y gravedad del perjuicio y la urgencia e impostergabilidad de las medidas que deberían adoptarse para impedir su ocurrencia".

"Evidentemente, esta Corporación ha entendido como irremediable aquel daño que puede sufrir un bien de alta significación objetiva protegido por el orden jurídico, siempre y cuando sea inminente, grave, requiera la adopción de medidas urgentes y, por lo tanto, impostergables, y se trate de la afectación directa o indirecta de un derecho constitucional fundamental y no de otros como los subjetivos, personales, reales o de crédito y los económicos y sociales, para los que existen vías judiciales ordinarias."

Por su parte la Sentencia T-051/16 se ha pronunciado respecto del principio de inmediatez y al respecto ha dicho lo siguiente:

"Por otro lado, en lo que tiene que ver con el principio de inmediatez, es pertinente resaltar que la finalidad de la acción de tutela en comento es garantizar una protección efectiva, actual y expedita frente a la transgresión o amenaza inminente de un derecho fundamental, motivo por el cual, entre la ocurrencia de los hechos en que se funde la pretensión y la

presentación de la demanda, debe haber transcurrido un lapso razonable.

En el evento en que no se cumpla con el requisito de inmediatez, se puede causar inseguridad jurídica frente a situaciones ya consolidadas en el orden administrativo y/o judicial, con lo que, a su vez, se puede afectar a terceros sobre los cuales recaiga la decisión e incluso el juez constitucional podría estar acolitando una conducta negligente de los administrados[11] que no comparecieron al proceso correspondiente, no presentaron los recursos procedentes ni hicieron ejercicio de los medios de control vigentes[12].

En este sentido el Tribunal Constitucional mediante Sentencia T-792 de 2009, manifestó lo siguiente:

"la jurisprudencia constitucional ha enfatizado en el hecho de que el mismo exige que la acción sea promovida de manera oportuna, esto es, dentro de un término razonable luego de la ocurrencia de los hechos que motivan la afectación o amenaza de los derechos. Esa relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el supuesto vulnerador de los derechos fundamentales, debe evaluarse, según ha dicho la Corte, en cada caso concreto, con plena observancia de los principios de razonabilidad y proporcionalidad".

Así las cosas, teniendo en cuenta que no es posible establecer de manera generalizada un tiempo restrictivo para el ejercicio de la acción tuitiva, en cada caso particular el juez de instancia deberá realizar un estudio que permita determinar si se cumple o no con el requisito de inmediatez. Como criterios de referencia, en la Sentencia T-194 de 2014, se establecieron los siguientes:

(i) La existencia de razones válidas para la inactividad[13](...).

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece (...). [14]

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante (...)"[15] .

Estos criterios o las razones que motivan la procedencia de la acción de tutela, a pesar de que, en principio, no se cumpla con el requisito de inmediatez, deben ser probados sumariamente o al menos manifestados en la demanda, ya que es el accionante quien conoce las razones que le impidieron acudir antes al amparo constitucional y, pese a que ya hubiere transcurrió un término considerable desde la ocurrencia de los hechos, requiere una protección judicial urgente.

Por otra parte, cuando una tutela se presenta porque el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial[16], se considera pertinente, de cara al requisito de inmediatez, tener en cuenta (i) la fecha en que se profirió el acto administrativo, (ii) la fecha en que se tuvo conocimiento del mismo y (iii) las actuaciones desplegadas por la parte actora desde ese momento.

Finalmente, de lo anterior se desprende que con el requisito de inmediatez, se busca evitar que la acción de tutela instaurada contra actos administrativos, sea empleada para subsanar la negligencia en que incurrieran los administrados para la protección de sus derechos. Por otro lado, se constituye como una garantía de la seguridad jurídica que se deriva de los actos administrativos[17], por medio de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas.

Se reitera que la acción de tutela ha sido instituida por el Constituyente como un mecanismo de defensa judicial al cual pueden acudir las personas cuando consideren vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales ya sea por la acción u omisión de una autoridad pública o por particulares, éstos en los precisos términos señalados en la ley. Por consiguiente, la persona que considere se le ha desconocido un derecho fundamental, puede acudir ante los jueces con el fin de obtener, a través de un procedimiento preferente y sumario, una orden destinada a que el infractor del ordenamiento constitucional actúe o se abstenga de hacerlo y así lograr el restablecimiento de sus derechos.

En esa medida, para que el juez de tutela ordene el amparo de los derechos fundamentales de una persona, se requiere demostrar o acreditar la amenaza o vulneración de estos. Por manera que si dentro del plenario no se revela ese desconocimiento, se impone la denegación de la tutela.

De este modo, se observa que el peticionario cuenta con otros mecanismos distintos al presente para reclamar sus derechos, lo que hace improcedente la presente acción de tutela, pues la misma está condicionada a la existencia de éstos, predicar cuestión distinta resultaría contrario al principio mínimo de justicia como ha señalado Nuestro Máximo Tribunal Constitucional, ya que si se partiera del supuesto de que la tutela procede siempre en cualquier relación conllevaría a suprimir la facultad que se tiene para resolver los conflictos ante la jurisdicción ordinaria o extraordinaria competente, lo que corrobora aún más la improcedencia de la acción.

Ello por cuanto este juzgador constata que la parte accionante no documentó haber instaurado la correspondiente solicitud de incumplimiento ante el Juzgado 8 de Familia de esta ciudad, como tampoco que haya elevado la solicitud respectiva ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a fin de que se inicie el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, concluyéndose de ésta manera que acudió a ésta instancia judicial sin agotar los procedimientos que se encuentran previamente establecidos para dicho fin. Más aún, cuando no se acreditó que el medio o recurso existente carece de eficacia, como tampoco que la acción constitucional se hubiese instaurado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Ha de tenerse en cuenta que la Corte Constitucional ha manifestado de forma reiterada que acudir a la acción de tutela cuando existen mecanismos ordinarios de defensa, desconoce que los procedimientos administrativos y los procesos ante la administración de justicia son los primeros y más propicios escenarios para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. Por ello, un requisito de procedencia formal de la acción de tutela es que se hayan agotado todas las instancias y recursos en los cuales el afectado hubiera podido solicitar la protección del derecho amenazado o vulnerado.

Dadas las premisas planteadas los amparos de la tutela impetrada serán negados, como quiera que, además de que no nos encontramos ante un perjuicio irremediable, como tampoco se demostró la vulneración de derecho fundamental alguno al accionante, tampoco se cumplió con el requisito de inmediatez, en tanto los hechos alegados vienen acaeciendo desde hace más de un año, sin que se hayan ejercido las acciones legales correspondientes. Aunado que la comisaría de familia accionada ha actuado conforme las competencias que le han sido asignadas y con apego a la ley que regula el trámite propio de la medida de protección provisional, y en este sentido este Despacho Judicial no puede inmiscuirse en dichos trámites, toda vez que al interior de los mismos se surte un procedimiento legalmente establecido, que no puede ser violentado en sede de tutela, más aún cuando no se configuró vulneración al debido proceso.

En mérito de lo expuesto, EL JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D. C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la ACCION DE TUTELA instaurada por el señor RAFAEL GABRIEL SOSA URIARTE en contra de COMISARIA DE FAMILIA 11 SUBA 1 y SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y vinculados VIVIANA GABRIELA SOSA BONILLA, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE BOGOTÁ y PROCURADURIA DELEGADA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA – PROCURADORA 152 JUDICIAL II DE FAMILIA, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente fallo.

SEGUNDO: Contra la presente decisión procederá la impugnación por la vía jerárquica dentro de los tres (3) días siguientes al de su notificación. (Art.31 Decreto 2591 de 1.991).

TERCERO: Notifíquese la presente decisión a los intervinientes, por el medio más expedito.

CUARTO: Sí este fallo no fuere impugnado, transcurrido el término respectivo y en la oportunidad de que da cuenta el inciso segundo del Art.31 ejusdem, ENVÍESE EL EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION, PREVIA LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS.

QUINTO: De igual manera, proceda la secretaria a incluir la presente providencia en el Portal Web de la Rama Judicial - Estados Electrónicos.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



FRANCISCO ÁLVAREZ CORTÉS

Juez

Se les hace saber a las partes, que por la coyuntura de emergencia y para efecto del pleno ejercicio del debido proceso, en caso se querer impugnar la anterior decisión, la misma deberá ser enviada al correo institucional del juzgado (cmpl12bt@cendoj.ramajudicial.gov.co)